

DECRETOS DECRETOS DECRETOS

DECRETOS

EXTRADICION DE SOMOZA Y FAMILIA

Decreto No. 1

LA JUNTA DE GOBIERNO
DE RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

Decreta:

Arto. 1.—Se faculta al Procurador General de Justicia para que de inmediato proceda a solicitar la extradición de Anastasio Somoza Debayle, Anastasio Somoza Portocarrero, José Somoza y demás miembros de la familia Somoza y sus allegados, lo mismo que todos aquellos funcionarios públicos o militares que hubiesen abandonado el país a partir de Diciembre de 1977 y a los que por sentencia resultaren culpables de enriquecimiento ilícito.

Arto. 2.—La presente Ley entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Managua, veinte de Julio de mil novecientos setenta y nueve. — “Año de la Liberación Nacional”.

JUNTA DE GOBIERNO
DE RECONSTRUCCION NACIONAL

*Violeta B. de Chamorro. — Sergio Ramírez Mercado. —
Moisés Hassan M. — Alfonso Robelo Callejas. — Daniel
Ortega Saavedra. ○*

Decreto No. 3

LA JUNTA DE GOBIERNO
DE RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

En uso de sus facultades,

Decreta:

Arto. 1.—Se faculta al Procurador General de Justicia para que de inmediato proceda a la intervención, requisación y confiscación de todos los bienes de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de Diciembre de 1977.

Una vez intervenidos, requisados o confiscados estos bienes, el Procurador General de Justicia remitirá todo lo actuado a las autoridades correspondientes.

Arto. 2.—La presente Ley, entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Managua, veinte de Julio de mil novecientos setenta y nueve. — *"Año de la Liberación Nacional"*.

JUNTA DE GOBIERNO
DE RECONSTRUCCION NACIONAL

Violeta B. de Chamorro. — Sergio Ramírez Mercado. — Moisés Hassan M. — Alfonso Robelo Callejas. — Daniel Ortega Saavedra. ○

DEROGACION DE LEYES REPRESIVAS

Decreto No. 8

LA JUNTA DE GOBIERNO
DE RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Decreta:

Arto. 1o.—Derógase el Código de Radio y Televisión así como el Capítulo 9o. del Título 3o. del Código Penal, debiéndose en consecuencia, tramitar por medio de la oficina correspondiente, todo lo relativo a la concesión de permiso para publicaciones o licencias para el uso de frecuencias radio-eléctricas o de canales para televisión.

Arto. 2o.—El Estado garantiza el derecho que toda persona tiene a la libertad de pensamiento y de expresión, comprendiendo este derecho la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones o ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Arto. 3o.—El ejercicio del derecho a que se refiere el Artículo anterior, no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente tipificadas por la Ley y son necesarias para asegurar:

- a. El respeto a los derechos y a la reputación de los demás;
- b. La protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud y la moral pública.

Arto. 4o.—El Estado regulará por Ley especial el ejercicio de estos derechos.

Arto. 5o.—La presente Ley entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los veinte días del mes de Julio de mil novecientos setenta y nueve. — *"Año de la Liberación Nacional"*. JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — *Moisés Hassan Morales. — Violeta B. de Chamorro. — Sergio Ramírez Mercado. — Alfonso Robelo Callejas. — Daniel Ortega Saavedra. ○*

LEY DE EMERGENCIA NACIONAL

Decreto No. 10

LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Considerando:

1o.—Que las acciones genocidas del somocismo provocaron la destrucción de innumerables y valiosas vidas, la destrucción de muchas de nuestras ciudades, centros productivos, instalaciones de uso público, obras de infraestructura, que han dejado nuestra economía en bancarota.

2o.—Que se hace necesario asegurar a la familia nicaragüense condiciones de paz, estabilidad y protección bajo un nuevo régimen de justicia social.

Decreta:

El estado de emergencia en todo el territorio nacional que se regirá por la siguiente LEY DE EMERGENCIA NACIONAL:

Arto. 1o.—Todas las instalaciones militares y civiles de la antigua guardia nacional, quedan bajo el exclusivo control del Ejército Sandinista.

Arto. 2o.—Serán penados con tres meses a dos años de obras públicas los que incurrieren en los siguientes delitos:

- a. La suspensión concertada del transporte público, urbano y de todas las demás clases de transporte público o privado;
- b. Los presidentes, directores, gerentes, administradores y jefes de departamentos y/o responsables de algún equipo de trabajo en las empresas privadas que se negaren a reintegrarse a sus labores, la abandonaren o que obstaculizaren el buen funcionamiento de la misma. Incurrirán

en la misma pena, los funcionarios públicos que tengan bajo su responsabilidad tareas indispensables para el normal desarrollo de las instituciones públicas o entes autónomos del Estado;

- c. El que tratare de alzar o bajar el precio de mercaderías, valores o tarifas reguladas por la autoridad económica correspondiente, mediante negociaciones fingidas, noticias falsas, especulaciones, acaparamiento, destrucción de productos, mediante convenio con otros productores o tenedores o empresarios, o comerciantes por cualquier otro medio.

Serán sancionados con la misma pena los autores, cómplices o encubridores de contrabando;

- d. El que ocultare bienes de consumo básicos con fines especulativos;
- e. El que violare las disposiciones que la autoridad económica correspondiente dictare, a fin de evitar la fuga de divisas, y/o tráfico ilegal de moneda nacional o extranjera;
- f. La defraudación en el pago de los servicios públicos será sancionada con la misma pena.

Arto. 3o.—Se declaran suspensos de aprobación y posibles de anulación, hasta tanto no se haga un estudio de los mismos, todos los traspasos de bienes inmuebles y bienes muebles efectuados con posterioridad al treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete.

El autor, cómplice o encubridor que con el objeto de eludir la acción de la justicia, ocultare bienes o simularen su traspaso será penado con prisión de uno a tres años.

Arto. 4o.—El Estado podrá acordar el uso racional y transitorio de cualquier vivienda o edificación particular para fines de utilidad pública reconociéndole al dueño una justa compensación a establecerse por la autoridad económica competente.

Todos los colegios e instituciones educativas de carácter privado deben poner todas sus instalaciones físicas al servicio del Estado, durante los períodos en que las aulas estén fuera de su horario de clase.

Arto. 5o.—Las autoridades locales podrán requerir la colaboración de la ciudadanía para realizar labores no remuneradas en beneficio de la comunidad.

Arto. 6o.—El que contraviniera las normas que en materia de alquileres de viviendas estableciere la autoridad económica correspondiente, será sancionado con

multa equivalente al valor del canon de tres a doce meses.

Se suspenden por un período de seis meses contados a partir de esta fecha, todos los juicios de desahucios.

Arto. 7o.—Queda facultado el Estado, a través de la autoridad competente, a intervenir aquellas empresas cuyos propietarios abandonaren o se negaren a ponerla en funcionamiento.

Arto. 8o.—Los medios de comunicación colectiva podrán ser puestos, en función del Estado de Emergencia, al servicio de los fines que persigue el estado y en la forma en que el Gobierno lo determine.

Arto. 9o.—El Ministerio del Transporte o las autoridades correspondientes quedan facultadas para tomar las medidas pertinentes a fin de asegurar el adecuado aprovisionamiento y distribución de combustibles y demás energéticos, así como repuestos para cualquier tipo de equipo de transporte.

Podrá así mismo, por causa justificada, requisar equipo de transporte de propiedad particular, mediante compensación, cuando fuere el caso. Tomará también las medidas del caso para el buen funcionamiento del transporte colectivo, terrestre, marítimo, lacustre o aéreo.

Disposiciones Especiales:

Arto. 10.—A fin de agilizar la aplicación de la presente ley, se crean "TRIBUNALES ESPECIALES DE EMERGENCIA", éstos serán constituidos por:

- a. Tres miembros propietarios con sus respectivos suplentes, designados por los gobiernos locales de cada cabecera departamental, incluyendo la ciudad capital.

Arto. 11.—Los mencionados Tribunales conocerán de violaciones al presente decreto mediante el procedimiento siguiente:

El juicio será verbal de acuerdo a los siguientes términos:

- 1. La denuncia presentada se notificará verbalmente o por escrito al indiciado, quien deberá contestarla en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la fecha y hora en la notificación, nombrando en ese acto su defensor.
- 2. A partir del plazo anterior, se abrirá el juicio a pruebas por tres días.

3. Presentadas las pruebas, el tribunal dictará la sentencia que corresponda dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas improrrogables.

4. La sentencia así dictada, será firme y sin ulterior recurso.

Arto. 12.—Los Tribunales Especiales de Emergencia podrán remitir a los tribunales comunes los casos que estimaren convenientes.

Disposiciones Transitorias:

Arto. 13.—La presente Ley regirá durante un período de treinta días pudiendo prorrogarse si persistiere el Estado de Emergencia.

Arto. 14.—La presente ley entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Managua, veintidós de Julio de mil novecientos setenta y nueve. — “Año de la Liberación Nacional”. — JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — (f) Sergio Ramírez Mercado. — (f) Daniel Ortega Saavedra. — (f) Moisés Hassan Morales. — (f) Violeta B. de Chamorro. — (f) Alfonso Robelo Callejas. ○

NACIONALIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Decreto No. 25

LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA

Considerando:

- I. Que la destrucción y desorden económico causados por la tiranía somocista han ocasionado un grave perjuicio a las instituciones financieras privadas en cuanto a su capacidad particular para cumplir sus obligaciones con el público, con el Estado y con el exterior, encontrándose en consecuencia imposibilitadas para cumplir sus funciones económicas;
- II. Que es un deber ineludible del Estado el garantizar la efectiva disponibilidad de los depósitos del público en el sistema financiero a fin de preservar la seguridad del ahorrante y de restaurar de inmediato el normal funcionamiento de las institucio-

nes financieras;

- III. Que es conveniente hacer un esfuerzo para preservar el prestigio del país en el ámbito financiero internacional asegurando el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por las instituciones financieras privadas;
- IV. Que la rehabilitación de la economía nacional y la restauración del normal funcionamiento del sistema financiero requerirán la canalización de importantes sumas de recursos públicos a las instituciones financieras;
- V. Que es de interés nacional y utilidad pública asegurar la adecuada captación y canalización de los recursos del sector financiero nacional hacia las necesidades y prioridades de la reconstrucción, transformación y desarrollo del país;
- VI. Que resulta de la mayor trascendencia para el reordenamiento de la realidad socio-económica del país la institucionalización de un sistema financiero unificado, que coordine entre sí sus propias actividades, así como con los demás sectores de la economía mixta cuya construcción se propone impulsar el Gobierno de Reconstrucción Nacional;
- VII. Que en el programa de Gobierno de la Junta de Reconstrucción Nacional prevé la necesidad de efectuar un ajuste sustantivo en la organización y el funcionamiento del sistema financiero privado, con la profundidad y los procedimientos que sean pertinentes;

En uso de sus facultades,

Decreta:

Arto. 1.—*Nacionalización del sistema financiero privado:*

a. *Banca privada nacional y otras instituciones financieras:*

Quedan nacionalizadas las instituciones privadas del sistema financiero mediante la adquisición por el Estado de la totalidad de las acciones de cada una de las respectivas sociedades anónimas bajo cuya forma funcionan las instituciones que lo integran. La transferencia de dichas acciones del patrimonio de los actuales accionistas al dominio del Estado se operará por Ministerio de la Ley con la promulgación del presente Decreto. No quedan comprendidas en la nacionalización

las Instituciones de Seguros y los Almacenes Generales de Depósito, entidades que estarán sujetas a un régimen especial a establecerse posteriormente;

b. Banca privada extranjera:

Las sucursales de bancos privados de propiedad extranjera no podrán captar recursos del público y quedarán sujetos a un Régimen Especial que establecerá el Banco Central.

Arto. 2.—Precio de Adquisición:

El precio de adquisición de las acciones a que se refiere el primer párrafo del Art. 1, será el valor en libros según auditoría que se practicará al efecto. Para establecer el valor en libros de las acciones se aplicarán normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones dictadas con anterioridad al presente Decreto por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones.

Arto. 3.—Pago en Bonos del Estado:

El precio de las acciones será pagado con bonos del Estado que devengarán un interés del 6 1/2 por ciento anual pagadero por anualidad vencida computada desde la fecha de promulgación del presente Decreto, y tendrán un plazo de cinco años de vencimiento.

Sus tenedores usarlos para la cancelación de obligaciones financieras o fiscales con el Estado. El Estado podrá cancelar los bonos mediante su pago en efectivo en cualquier momento antes del vencimiento.

Arto. 4.—Modificaciones de Juntas Directivas:

Las actuales Juntas Directivas de las Instituciones afectadas por el presente Decreto cesarán en sus funciones en la fecha de su promulgación. Entre tanto los nuevos Directores no sean nombrados de acuerdo con las regulaciones que se dictaren por quien corresponda, el Banco Central de Nicaragua designará uno o más Directores interinos de cada Institución.

Arto. 5.—Normal Funcionamiento:

Todos los funcionarios y empleados de las Instituciones deberán permanecer en sus puestos y cumplir sus funciones con entera lealtad a la respectiva Institución y al Estado.

Arto. 6.—Firmas Autorizadas:

Las sustituciones de firmas autorizadas que sean consecuencia lógica del presente Decreto deberán comunicarse de inmediato a todos los interesados.

Arto. 7o.—Entrada en Vigor:

Este Decreto entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Managua, veintiséis de Julio de mil novecientos setenta y nueve, "Año de la Liberación Nacional".

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — Violeta B. de Chamorro. — Sergio Ramírez Mercado. — Moisés Hassan M. — Alfonso Robelo Callejas. — Daniel Ortega Saavedra. ○

LEY DE SALARIOS CAIDOS

Decreto No. 28

**LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA**

En uso de sus facultades y en atención a la situación de Emergencia Nacional, emite el siguiente:

Decreto:

Arto. 1o.—Para todos los efectos legales, los salarios de los meses de Junio y Julio de 1979, se estimarán como salarios caídos, cuando no sean mayores de C\$5,000.00.

Arto. 2o.—Todos los salarios superiores a C\$ 5,000.00 sólo se pagarán como salarios caídos hasta esa cantidad.

Arto. 3o.—La forma de pago y demás estipulaciones en cuanto a los salarios caídos de los meses en referencia, será convenida entre la empresa y los trabajadores, con la intervención del Ministerio del Trabajo, tomándose en cuenta las circunstancias particulares de cada caso.

Arto. 4o.—Quedan en suspenso todas las disposiciones de la legislación laboral que se oponga a las dispo-

siciones de este decreto.

Arto. 5o.—La presente Ley entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los dos días del mes de Agosto de mil novecientos setenta y nueve. —
“Año de la Liberación Nacional”.

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — *Violeta B. de Chamorro.* — *Sergio Ramírez Mercado.* — *Moisés Hassan M.* — *Alfonso Robelo Callejas.* — *Daniel Ortega Saavedra.* ○

LEY CREADORA DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE EMERGENCIA

Decreto No. 34

LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA

Decreta:

La siguiente:

LEY DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES DE EMERGENCIA

Arto. 1o.—Los Tribunales Especiales de Emergencia conocerán y resolverán los conflictos o las violaciones estipuladas en la Ley sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública y la Ley de Emergencia Nacional.

Arto. 2o.—Los Tribunales Especiales de Emergencia tendrán su asiento en cada cabecera departamental y la competencia será la circunscripción territorial del respectivo Departamento de la República.

Podrán además, nombrarse otros Tribunales Especiales de Emergencia para un mismo Departamento o Ciudad, de conformidad con las necesidades que surgieren.

Arto. 3o.—Los Tribunales Especiales de Emergencia estarán constituidos por tres miembros propietarios con sus respectivos suplentes, designados por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Arto. 4o.—Los Miembros de los Tribunales Especiales de Emergencia deberán llenar los siguientes requisitos:

- a. Ser mayores de veintiún años de edad;
- b. Ser de reconocida honestidad y solvencia moral;
- c. No haber estado enjuiciado o cumplido condena por delito común alguno;
- d. Haber observado una conducta ejemplar.

Arto. 5o.—El juicio será verbal de acuerdo a lo siguiente:

- a. Presentada la denuncia por la Procuraduría General de Justicia o su delegado departamental, se pondrá ésta en conocimiento verbal o por escrito de la persona o personas denunciadas, quienes deberán contestarla dentro del plazo de cuarenta y ocho horas;
- b. Las personas que fueren objeto de la denuncia podrán defenderse en el plazo antes dicho, personalmente o nombrando a cualquier otra persona de su escogencia;
- c. Transcurrido el plazo para la contestación el juicio se abrirá a prueba por tres días;
- d. Concluido el término probatorio y si hubiere persona detenida, el Tribunal deberá dictar la sentencia que corresponda dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas. En otros casos, el Tribunal tendrá hasta diez días para fallar.

Arto. 6o.—La sentencia podrá ser apelada dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, por la persona en quien recayere la pena, quien se personará y expresará agravios en el mismo plazo, ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Arto. 7o.—La Corte de Apelaciones emitirá su fallo en el plazo de tres días a partir del apersonamiento y expresión de agravios.

Arto. 8o.—Los Tribunales Especiales de Emergencia, conocerán a manera de Jueces instructores en los delitos contemplados en los Artos. 1o. y 2o., de la Ley de Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública, pasando lo actuado al Juez de Distrito correspondiente quien seguirá la tramitación común ordinaria.

Arto. 9o.—Quedan a salvo los derechos de terceros que se sientan perjudicados los cuales podrán comparecer ante el Tribunal Especial de Emergencia respectivo a deslindar responsabilidades y reclamar los derechos y

bienes que considere afectados, todo lo cual se hará en trámite separado, aplicándose el mismo procedimiento si fuere necesario.

Arto. 10.—El Procurador General de Justicia o su delegado podrá intervenir en todos los trámites e instancias de juicio.

Disposiciones Generales

Arto. 11.—Los Tribunales Especiales de Emergencia tendrá facultad para proceder de oficio en el mejor desarrollo de sus funciones.

Arto. 12.—Se consignarán por escrito únicamente la denuncia, la sentencia y cualquier otra diligencia que el Tribunal considere indispensable.

Arto. 13.—En cualquier estado del juicio a petición del Procurador o de oficio, los Tribunales Especiales de Emergencia podrán ordenar la detención o libertad de la persona denunciada.

Arto. 14.—Los Tribunales tendrán facultad de citar como testigo a cualquier persona aún por medio de la fuerza pública si fuere necesario.

Arto. 15.—Los Tribunales Especiales de Emergencia podrán ordenar la guarda de persona o el depósito de bienes en ciudadanos moralmente responsables a juicio del mismo Tribunal.

Arto. 16.—En cualquier estado del juicio, los Tribunales Especiales de Emergencia y la Corte de Apelaciones respectiva, cuando hubiere persona detenida, podrán ordenar su libertad bajo fianza de ciudadano moralmente aceptable.

Arto. 17.—Los Tribunales Especiales de Emergencia podrán remitir a los Tribunales comunes los casos que estimaren convenientes.

Arto. 18.—Los miembros de los Tribunales Especiales de Emergencia, tomarán posesión por el simple hecho de su nombramiento.

Arto. 19.—La presente Ley estará en vigencia mientras subsista la Ley de Emergencia Nacional.

Arto. 20.—La presente Ley deroga los Artículos cinco, seis y siete de la Ley sobre el Mantenimiento del Orden y Seguridad Pública y los Artículos diez, once y doce de la Ley de Emergencia Nacional.

Arto. 21.—Esta Ley entrará en vigencia hoy, desde

el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los siete días del mes de Agosto de mil novecientos setenta y nueve. —
“Año de la Liberación Nacional”.

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — *Sergio Ramírez Mercado.* — *Moisés Hassan Morales.* — *Alfonso Robelo C.* — *Daniel Ortega Saavedra.* — *Violeta B. de Chamorro.* ○

LEY CONSTITUTIVA DEL FONDO INTERNACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE NICARAGUA

Decreto No. 46

LA JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA

Considerando:

1. Que es obligación primordial del Gobierno adoptar las medidas y realizar las acciones que se requieran para organizar las tareas vinculadas a la Reconstrucción Nacional.
2. Que para tales efectos es indispensable que se disponga de mecanismos idóneos, que hagan posible el eficiente manejo de la cooperación financiera que Nicaragua reciba de los países amigos, en forma bilateral, subregional, regional o multilateral.

Tomando en Cuenta:

3. Que en oportunidad de celebrarse en Caracas, Venezuela, entre el 30 de Julio y el 2 de Agosto de 1979, la Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, órgano máximo de dirección del Sistema Económico Latinoamericano (SELA), dicho Consejo expresó en forma unánime su apoyo solidario al Programa de Reconstrucción Nacional de Nicaragua y su voluntad de cooperar en el mismo con absoluto respeto a los principios de autodeterminación y soberanía, coadyuvando también a aumentar el poder de negociación del país ante la comunidad internacional.
4. Que de acuerdo con los lineamientos anteriores el

materias de sus respectivas áreas de competencia, quienes participarán en ellas con voz y voto; y

- b. El Director Ejecutivo, quien será designado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Arto. 7o.—El Banco Central de Nicaragua será el agente financiero del Fondo y podrá actuar como fiduciario del mismo.

Arto. 8o.—El Directorio tendrá las siguientes atribuciones:

- a. Cumplir y hacer que se cumplan las normas de la presente Ley y las disposiciones de la Junta de Gobierno;
- b. Elaborar el proyecto de Plan Financiero de acuerdo con lo previsto en el Arto. 14 de esta Ley;
- c. Proponer a la Junta de Gobierno las normas de política y operación del Fondo;
- d. Autorizar, cuando proceda, los contratos de préstamo que presente a su consideración el Director Ejecutivo, y establecer los límites, montos y condiciones en que éste último podrá actuar sin autorización previa;
- e. Promover la emisión y gestionar la colocación de "Bonos para la Reconstrucción de Nicaragua" y otros títulos-valores para los mismos fines;
- f. Concertar con el Banco Central de Nicaragua los acuerdos que fueren necesarios para realizar las operaciones del Fondo, especialmente contratos de fideicomiso;
- g. Informar a la Junta de Gobierno, con la periodicidad que ésta determine, sobre las actividades y operaciones del Fondo;
- h. Proponer a la Junta de Gobierno la designación de los promotores y gestores del Fondo mencionados en el Arto. 19o. de esta Ley; y
- i. En general, ejercer cualesquiera otras funciones que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del Fondo.

El Directorio se reunirá ordinariamente dos veces al mes y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos.

Arto. 9o.—Los "Bonos para la Reconstrucción

de Nicaragua" y los otros títulos-valores que se emitan conforme el Artículo precedente gozarán de la garantía del Estado.

Arto. 10.—El Director Ejecutivo es el representante legal del Fondo, y el funcionario responsable de la ejecución y administración del mismo, de conformidad con la presente Ley. Tendrá, además, las responsabilidades y facultades que le asigne el Directorio. Participará en las reuniones del Directorio, con voz pero sin voto.

El Director Ejecutivo nombrará el personal que sea indispensable para la realización de las operaciones del Fondo. Los Ministerios e Instituciones del sector público cuyas actividades se relacionen con las del Fondo, proporcionarán al Director Ejecutivo la colaboración necesaria para alcanzar los objetivos de esta Ley.

Arto. 11.—Corresponde al Ministerio de Finanzas, de conformidad con el derecho interno, la contratación, administración y satisfacción de la deuda externa resultante de las actividades del Fondo.

Arto. 12.—Siempre que sea procedente, en la gestión y negociación de los recursos del Fondo intervendrán los Ministerios e Instituciones y demás entes del sector público encargados de la ejecución o administración de los programas o proyectos correspondientes.

La aplicación y recuperación, en su caso, de los recursos destinados a programas, sectores y proyectos específicos, así como la ejecución correspondiente, serán responsabilidad de las Instituciones o Entidades destinatarias de dichos recursos.

Arto. 13.—La auditoría y supervisión contable del Fondo será ejercida por la Contraloría General de la República.

IV. *Mecanismos y Procedimientos Operativos*

Arto. 14.—Los recursos del Fondo, cualquiera que sea su naturaleza, valor monetario, origen, destino y forma de propiedad o tenencia, deberán consignarse en el Plan Financiero que elaborará el Director Ejecutivo del Fondo. Dicho Plan estará sujeto a la aprobación de la Junta de Gobierno.

El Plan Financiero deberá contener, principalmente, los siguientes elementos:

- a. Indicación separada de los recursos monetarios y de los recursos en materiales, bienes de producción y servicios, aplicándose, cuando co-

Consejo Latinoamericano decidió en el Artículo 5o. de la Decisión 43, aprobada por aclamación en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 1o. de Agosto de 1979: "Cooperar con el Gobierno de Nicaragua en las gestiones internacionales que se propone realizar con terceros países, principalmente los países industrializados de economía de mercado, los países árabes y los países socialistas, la comunidad financiera internacional y los organismos de cooperación técnica, particularmente aquellos pertenecientes al Sistema de las Naciones Unidas".

5. La decisión del Gobierno de Reconstrucción Nacional anunciada en ocasión de la Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano, en el sentido de establecer un mecanismo institucional que facilite al país la obtención y canalización de recursos financieros a nivel mundial, para los fines de la Reconstrucción Nacional y de acuerdo con las políticas y prioridades que establezca la Junta de Gobierno.

Por Tanto:

en uso de sus facultades,

Decreta:

la siguiente:

LEY CONSTITUTIVA DEL FONDO INTERNACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE NICARAGUA

I. Creación y Objetivos:

Arto. 1o.—Se crea el Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua (en adelante denominado "el Fondo"), el cual se regirá por las normas de la presente Ley. El Fondo tendrá una duración de diez años.

Arto. 2o.—El Fondo tiene por objeto promover y gestionar la obtención de cooperación financiera de Gobiernos, ya sea en forma bilateral, subregional, regional o multilateral, para coadyuvar en el esfuerzo interno de reconstrucción nacional. Asimismo, podrá recibir, previa aceptación cooperación en materiales, bienes de producción y servicios, de acuerdo con las necesidades y prioridades de la reconstrucción nacional que determine la Junta de Gobierno.

El Fondo registrará, centralizará y coordinará dichos recursos, y tendrá la responsabilidad de canalizarlos a las entidades ejecutoras correspondientes y de vigilar que su aplicación se haga en forma eficiente.

II. Recursos:

Arto. 3o.—El Fondo promoverá y gestionará la obtención de las siguientes clases de recursos:

- a. Donaciones monetarias y donaciones en materiales, bienes de producción o servicios;
- b. Depósitos en divisas, recibidos de bancos centrales, para fortalecer las reservas internacionales del país;
- c. Recursos no reembolsables, o de recuperación contingente, vinculados a la ejecución de proyectos o programas y a actividades de pre-inversión;
- d. Créditos o empréstitos de libre disponibilidad o con destino al financiamiento de programas, sectores y proyectos específicos;
- e. El producto de la colocación de "Bonos para la Reconstrucción de Nicaragua" y otros títulos valores para los mismos fines; y
- f. Otros recursos financieros obtenidos a cualquier título.

Arto. 4o.—En la obtención de recursos reembolsables, el Fondo dará prioridad a la captación de préstamos de alto contenido concesional.

III. Organización:

Arto. 5o.—La dirección superior del Fondo corresponde a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. Para ese fin:

- a. Dictará la política general y los programas de acción que aseguren el adecuado funcionamiento del Fondo;
- b. Aprobará el Plan Financiero del Fondo que le presente el Directorio;
- c. Designará los promotores y gestores del Fondo a que se refiere el Arto. 19o. de esta Ley; y
- d. Tomará las demás decisiones que sean necesarias para la buena marcha del fondo.

Arto. 6o.—Son órganos del Fondo los siguientes:

- a. El Directorio, integrado por un miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, quien lo presidirá, y por los Ministros de Finanzas y de Planificación y el Presidente del Banco Central de Nicaragua. El Presidente del Directorio invitará a las reuniones a otros Ministros, Presidentes o Directores de organismos autónomos y entes descentralizados cuando se traten

responda, un valor convencional expresado en Córdoba;

- b. Clasificación de los recursos según su naturaleza, origen y plazo;
- c. Programación de las inversiones y erogaciones, de acuerdo con los proyectos, programas y sectores sociales y económicos de su destino final;
- d. Las prioridades de ejecución del Plan Financiero; y
- e. Las partidas indispensables para cubrir los gastos administrativos que requiera el funcionamiento del Fondo.

Arto. 15.—Los recursos que no sean monetarios se registrarán en contabilidad separada, debiendo limitarse el Fondo a verificar la entrega de los bienes de que se trate a las unidades ejecutoras correspondientes.

Arto. 16.—Los recursos del Fondo en moneda extranjera provenientes de donaciones, créditos o empréstitos serán percibidos exclusivamente por el Banco Central de Nicaragua, el cual los mantendrá invertidos temporalmente conforme a sus propias políticas de administración de las reservas internacionales de la Nación, y las disposiciones del Directorio del Fondo. En este último caso, se actuará de común acuerdo con el Consejo Directivo del Banco Central.

Los pagos y transferencias al exterior se regirán exclusivamente por el Plan Financiero del Fondo y por las instrucciones complementarias del Directorio.

Arto. 17.—En las actividades y operaciones que realice en razón de lo que establece la presente Ley, el Banco Central de Nicaragua aplicará los criterios, prácticas, usos y costumbres comúnmente reconocidos en las transacciones financieras internacionales. El Banco Central no cobrará comisiones cambiarias o bancarias que pudieran afectar el Fondo.

V. Promoción y Apoyo Internacional del Fondo

Arto. 18.—Los miembros de la Junta de Gobierno y del Directorio, así como el Director Ejecutivo, tendrán la principal responsabilidad en la promoción, fortalecimiento y ampliación del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua.

Arto. 19.—El Fondo podrá obtener los servicios de promotores y gestores de alto nivel. Dichos promotores y gestores serán nombrados por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, a propuesta del Directorio, y

tendrán la representación, facultades y mandatos que la mencionada Junta determine en cada caso.

Arto. 20.—Las actividades de promoción y gestión financiera que realice el Fondo contarán con el apoyo, al nivel internacional, de los países miembros del Comité de Acción del SELA para la Reconstrucción de Nicaragua, a través de las modalidades que permite su Acta Constitutiva. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional podrá solicitar la colaboración de dicho Comité de Acción para las actividades de reestructuración, reorganización y reconversión de la deuda externa.

VI. Disposición Transitoria

Arto. 21.—La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional designará al Director Ejecutivo del Fondo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

VII. Disposiciones Finales

Arto. 22.—El Gobierno de la República decidirá los términos y la forma en que se procederá a la liquidación o transformación del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua.

Arto. 23.—Los reglamentos y regulaciones que requiera la aplicación de esta Ley serán dictados por el Directorio.

Arto. 24.—La presente Ley entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los dieciséis días del mes de agosto de mil novecientos setenta y nueve, "Año de la Liberación Nacional".

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — Violeta B. de Chamorro. — Sergio Ramírez Mercado. — Alfonso Robelo Callejas. — Moisés Has-san. — Daniel Ortega Saavedra. ○

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACION

EL MINISTERIO DE CULTURA

en uso de sus facultades que le confieren el inciso b) del Artículo 7 de la Ley General sobre Medios de Comunicación.

Decreta:

El siguiente:

**REGLAMENTO DE LA
LEY GENERAL SOBRE LOS
MEDIOS DE COMUNICACION**

Título Primero

Disposiciones Generales

Arto. 1o.—Cuando en el presente Decreto, se usan las iniciales “L.G.M.C.” debe entenderse que se hace referencia a la Ley General sobre los Medios de Comunicación.

Arto. 2o.—Para el cumplimiento de las atribuciones que el Arto. 7o. “L.G.M.C.”, otorga al Ministerio de Cultura, se crea la Dirección de Medios de Comunicación, que estará a cargo de un Coordinador General.

Dicha Dirección estará integrada por los siguientes Departamentos:

- a. De Concesiones y Permisos;
- b. De Asesoría Técnica;
- c. Los Otros Departamentos que se creen.

Arto. 3o.—Al Coordinador General de Medios de Comunicación corresponde la Administración de la Dirección de Medios de Comunicación, así como la coordinación general de todos los departamentos en que está constituido y los que lleguen a crearse con posterioridad.

Arto. 4o.—Compete al Coordinador General de la Dirección de Medios de Comunicación:

- I. Obtener de todas las estaciones de radio y televisión el encadenamiento a que se refiere el Artículo 7o., inciso (d) “L.G.M.C.”, salvo en caso de notoria urgencia, que podrá delegarlo en la Dirección de Divulgación y Prensa de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.
- II. Señalar el grado de proridad de difusión de los programas elaborados por las dependencias y organismos públicos que se transmitirán en el tiempo reservado por el Estado en las estaciones de radio y televisión.
- III. Cuidar que las transmisiones se sujeten a las disposiciones establecidas en la “L.G.M.C.” y el presente reglamento.
- IV. Conceder permiso para la transmisión directa de

programas originados en el extranjero.

Título II

Capítulo I

Concesiones y Permisos

Arto. 5o.—Corresponde al Departamento de Concesiones y Permisos:

- I. Otorgar y revocar concesiones y permisos para estaciones de radio y televisión, asignándoles la frecuencia respectiva.
- II. Declarar la nulidad o la caducidad de las concesiones o permisos y modificarlas en los casos previstos en esta Ley.
- III. Autorizar y vigilar, en coordinación con el Departamento de Asesoría Técnica el funcionamiento y operación de las estaciones y sus servicios y demás medios de comunicación a que se refiere esta Ley.
- IV. Intervenir en el arrendamiento, venta y otros actos que afecten el régimen de propiedad de las estaciones de radio y televisión; y
- V. Las demás facultades que le confiere la Ley.

Arto. 6o.—Para otorgar las concesiones o permisos, el Departamento de Concesiones y Permisos, determinará la naturaleza y propósitos de las estaciones de radio y televisión, los cuales podrán ser: comerciales, oficiales, culturales, de experimentación; escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole.

Las estaciones de radio y televisión comerciales requerirán de concesión. Las otras sólo requerirán permiso.

Arto. 7o.—Las concesiones para usar comercialmente estaciones de radio y televisión, en cualquiera de los sistemas de modulación, de amplitud o frecuencia se otorgarán:

- I. Únicamente a ciudadanos nicaragüenses o personas jurídicas, cuyos socios o asociados sean nicaragüenses.
- II. Si se tratare de sociedades por acciones, éstas tendrán que ser nominativas, inconvertibles al portador y trasmisibles entre vivos únicamente con la autorización del Ministerio de Cultura a personas naturales o jurídicas, que reunan los requisitos del presente reglamento; y por causa de muerte, se requerirá que los causahabientes reunan las calidades del inciso anterior.

III. La solicitud tendrá que presentarse por escrito,

con los siguientes datos: Nombre del solicitante o denominación social en su caso; fecha de constitución de la sociedad, domicilio, capital social, duración y nombre de las personas que forman su Junta de Administración y personal de dirección.

La solicitud se acompañará con los documentos que comprueben los datos anteriores.

Arto. 8o.—Se respetarán los derechos adquiridos por las estaciones de radio y televisión, siempre que se ajusten a los criterios técnicos y a las normas contenidas en este reglamento. Para tal efecto deberán demostrar ante el Departamento de Concesiones y Permisos que cumplen con los requisitos establecidos en el Artículo 7 de este reglamento.

Arto. 9o.—Todos los medios de comunicación colectivo deberán inscribirse en la Dirección de Medios de Comunicación, debiendo pagar anualmente en dicha dirección la suma de Dos Mil Córdobas (C\$2.000.00) para su funcionamiento.

Arto. 10.—La concesión para las estaciones de radio y televisión, contendrá cuando menos lo siguiente:

- I. Canal o frecuencia asignado.
- II. Ubicación del equipo transmisor.
- III. Potencia autorizada.
- IV. Sistema de radiación y sus especificaciones técnicas.
- V. Horario de funcionamiento.
- VI. Nombre, clase o indicativo.
- VII. Sistema de enlace: Línea telefónica o FM.
- VIII. Término de su duración.
- IX. Plazo para iniciar la construcción de sus instalaciones y terminirlas; y
- X. Plazo para iniciar las transmisiones.

Arto. 11.—El término de la concesión, no podrá exceder de 30 años, pudiendo ser renovado al mismo concesionario con preferencia sobre terceros.

Arto. 12.—Las características de las concesiones y permisos, no podrán alterarse, sino en virtud de resolución administrativa dictada de conformidad con la ley o en cumplimiento de resoluciones judiciales.

Arto. 13.—La enajenación, cesión, transferimiento, hipoteca o traspaso a cualquier título de la concesión o permiso, y, equipo transmisor no serán válidos si no se hace con la previa autorización de este Departamento.

Capítulo II

De los Medios de Información

Arto. 14.—Para desempeñarse como Periodista profesional en cualquier medio de comunicación colectivo, se requerirá constancia de afiliación de la Unión de Periodistas de Nicaragua (U.P.N.); y para los radio-periodistas de Managua bastará presentar una constancia similar otorgada por el Sindicato de Radio-Periodistas de Managua.

Capítulo III

Nulidad, Caducidad y Revocación

Arto. 15.—Las concesiones y los permisos que se obtengan o se expidan sin llenar los trámites o en contravención con las disposiciones del presente reglamento son nulas.

Arto. 16.—Las concesiones otorgadas para el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión, caducarán por las causas siguientes:

- I. No iniciar o no terminar la construcción de sus instalaciones dentro de los plazos y prórrogas que al efecto se señalen, salvo causa justificada.
- II. No iniciar las transmisiones dentro de los plazos fijados en la concesión, salvo causa justificada.

Arto. 17.—Son causas de revocación de las concesiones:

- I. Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin previa autorización del Departamento de Concesiones y Permisos.
- II. Cambiar él o los canales, o las frecuencias asignadas, sin la autorización del Departamento de Concesiones y Permisos.
- III. Enajenar, ceder o transferir, hipotecar, dar en garantía o en fideicomiso o gravar de cualquier modo, íntegra o parcialmente, la concesión y los derechos derivados de ella, y el equipo transmisor sin la aprobación del Departamento de Concesiones y Permisos.
- III. De la normalización del servicio al desaparecer la causa que motivó la emergencia.

Los avisos a que se refieren los incisos anteriores, se darán en cada caso, en un término de veinticuatro horas, a partir de cada hecho.

Arto. 21.—El funcionamiento técnico de las estaciones de radio y televisión deberá reunir las condiciones señaladas en las disposiciones que dicte este Depar-

tamento de acuerdo con las normas de ingeniería requeridas.

- IV. Suspender sin justificación los servicios de la estación difusora por un período mayor de 60 días.
- V. Cambiar el concesionario su nacionalidad nicaragüense o solicitar protección de algún Gobierno, empresa o personas extranjeras.
- VI. Modificar la escritura social en contravención con las disposiciones de esta Ley.
- VII. Cualquier falta de cumplimiento de las condiciones de la concesión, no especificada en las causales anteriores.

Arto. 18.—Los permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión, podrán ser revocados por los siguientes motivos:

- I. Cambiar la ubicación del equipo transmisor sin la autorización del Departamento de Concesiones y Permisos.
- II. Cambiar él o los canales y la o las frecuencias asignadas sin la autorización del Departamento de Concesiones y Permisos.
- III. No prestar con eficacia, exactitud o regularidad, el servicio especializado no obstante el apercibimiento.
- IV. Traspasar el permiso sin la autorización del Departamento de Concesiones y Permisos.
- V. Modificar la escritura social en contravención con las disposiciones de esta Ley.
- VI. Cualquier falta de cumplimiento de las condiciones especificadas en el permiso.

Título III

Capítulo I

Departamento de Asesoría Técnica

Arto. 19.—Corresponde el Departamento de Asesoría Técnica la coordinación y funcionamiento técnico de los medios de comunicación de conformidad con las normas señaladas a continuación.

Arto. 20.—Los Medios de Comunicación colectivo no podrán suspender sus transmisiones, salvo caso fortuito o fuerza mayor. El concesionario o permisionario deberá informar al Departamento de Asesoría Técnica.

- I. De la suspensión del servicio.
- II. De la utilización en su caso, de un equipo de emer-

gencia mientras dure la eventualidad que originó la suspensión; y

Arto. 22.—Este departamento dictará las medidas necesarias para evitar interferencias en las emisiones de radio y televisión. Toda estación o aparatos científico, terapéutico o industrial, y aquellas instalaciones que radien energía en forma suficientemente perceptible para causar perturbaciones a las emisiones autorizadas, deberán suprimir esas interferencias en el plazo que al efecto fije el departamento.

Arto. 23.—Este mismo departamento, evitará las interferencias entre estaciones nacionales e internacionales, y dictará las medidas convenientes para ello, velando porque las estaciones que operen sean protegidas en su zona autorizada de servicio.

Determinará también los límites de las bandas de los distintos servicios, la tolerancia o desviación de frecuencia y la amplitud de las bandas de frecuencia de emisión para toda clase de difusoras, cuando no estuvieren especificadas en los tratados respectivos.

Arto. 24.—No se considerará interferencia objetable la que provenga de algún fenómeno esporádico de radio-propagación.

Arto. 25.—Por efectos técnicos y de seguridad de las personas, las estaciones de radio y televisión deberán instalar sus plantas fuera de las ciudades.

Las emisoras que todavía funcionen dentro de las ciudades, tendrán que reubicar sus plantas fuera de éstas, para lo cual se les otorga un plazo máximo de seis meses a partir de esta fecha.

Arto. 26.—El Departamento de Asesoría Técnica podrá practicar visitas de inspección técnicas en las estaciones de radio y televisión para comprobar exclusivamente que su operación se ajusta a lo establecido en este reglamento.

Arto. 27.—Podrá asimismo, realizar las visitas de inspección técnicas que se consideren pertinentes y el concesionario o permisionario deberá atender las observaciones que por escrito se le hicieren.

Arto. 28.—La inspección y vigilancia técnica se hará por medio de los especialistas del departamento.

Arto. 29.—Los datos que el personal de inspección obtengan durante o con motivo de su visita, tendrán el carácter de confidenciales.

Arto. 30.—Si se constatare la existencia de fallas técnicas, el departamento así se lo hará saber por escrito al concesionario o permisionario para su pronta reparación, y de hacer caso omiso, el departamento procederá a reparar las fallas a costa del interesado.

Capítulo II

Programación

Arto. 31.—El derecho de información de expresión y de recepción, mediante la prensa escrita, radio y televisión, es libre y consecuentemente no será objeto de censura previa, ni de ninguna investigación judicial o administrativa, ni limitación alguna.

Arto. 32.—Los directores o dueños de espacios informativos de radio y televisión están obligados a su inscripción, señalando:

- I. El nombre del noticiero.
- II. El nombre de la estación o estaciones en que difundirá.
- III. La hora y el número de audiciones que tendrá.

Arto. 33.—Los directores o dueños de espacios informativos quedan igualmente sujetos a las disposiciones contenidas en el Artículo 14 y al pago anual de Quinientos Córdobas (C\$500.00); ante el Ministerio de Cultura por derechos de inscripción.

Arto. 34.—Las estaciones de radio y televisión deberán efectuar sin embargo, transmisiones gratuitas diarias con duración de hasta 30 minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales, sociales, económicos, deportivos, de acuerdo a las orientaciones generales que elaborará el Ministerio de Cultura y en horas que no afecten su programación regular.

Arto. 35.—Los concesionarios de estaciones radio-difusoras comerciales y los permisionarios de estaciones culturales, oficiales, de experimentación y radiofónicas, están obligados a transmitir gratuitamente y de preferencia.

- I. Los boletines de cualquier autoridad que se relacionen con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público o medidas encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública; y
- II. Los mensajes o cualquier aviso relacionado con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio.

Arto. 36.—Prohíbese hacer propaganda de cigarrillos y bebidas alcohólicas. No obstante las empresas productoras, distribuidoras, vendedoras de cigarrillos y bebidas alcohólicas podrán patrocinar programas de cualquier índole y los medios de comunicación podrán identificarlos como patrocinadores de los mismos.

Arto. 37.—La radio, televisión y prensa escrita, orientarán preferentemente sus actividades al fortalecimiento de nuestras conquistas revolucionarias, a la defensa de nuestra Revolución, a la ampliación de la educación popular, la difusión de la cultura, la extensión de los conocimientos, la propalación de las ideas que fortalezcan nuestros principios y tradiciones; el estímulo a nuestra capacidad para el progreso; a la facultad creadora del nicaragüense para las artes y el análisis de los asuntos del país desde un punto de vista objetivo, a través de orientaciones adecuadas que afirmen la unidad nacional.

Arto. 38.—Los programas de radio y televisión no deberán presentar series, radionovelas, telenovelas, radio-teatros y películas que atenten contra la moral o induzcan a la práctica de la violencia, discriminación racial, política, económica y social; quedando asimismo sujetos a las prohibiciones contemplados en el Arto. 3, de la Ley General sobre los Medios de Comunicación.

Capítulo III

Del Personal

Arto. 39.—La dirección del Departamento de Concesiones y Permisos estará a cargo de un Director quien es el responsable del Departamento y a quien corresponde cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Título II de este reglamento.

Arto. 40.—La dirección de la Asesoría Técnica estará a cargo de un Director quien es el responsable de la Asesoría y a quien corresponde cumplir y hacer cumplir lo establecido en el Título III, de este reglamento.

Arto. 41.—Para el cumplimiento de sus funciones, los directores de los departamentos de Concesiones y Permisos y Asesoría Técnica podrán contratar el personal técnico o Administrativos que consideren necesario.

Capítulo IV

De las Infracciones

Arto. 42.—Constituyen infracciones a la presente Ley:

- I. No cumplir con la obligación que imponen los Artículos 2 y 3 de la Ley General sobre los Medios de Comunicación.
- II. No prestar los servicios de interés nacional previstos en la Ley y en este reglamento.
- III. La operación de una emisora con una potencia distinta a la asignada sin autorización del Departamento de Concesiones y Permisos.
- IV. No cumplir con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley General sobre los Medios de Comunicación y el Artículo 14 del presente reglamento.

Arto. 43.—El Coordinador General de la División de Medios de Comunicación podrá ordenar la suspensión de cualquier tipo de publicaciones, proyecciones o transmisiones en los casos contemplados en el Artículo 3, "L.G.M.C." mientras se produce resolución del Consejo Especial Permanente, sin perjuicio que de lo ya publicado, transmitido o proyectado pudiere derivarse delitos que pasarán a ser conocidos por la legislación común y las leyes de emergencia nacional. Esto último, en cumplimiento al Artículo 7 de la Ley General de los Medios de Comunicación colectiva. No podrán constituirse nunca tribunales de excepción para el ejercicio del periodismo.

Arto. 44.—Las infracciones a los Ordinales II) y III) del Artículo 42, estarán sujetos a la suspensión de las transmisiones por un plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

Arto. 45.—Los medios de comunicación que incurran en las infracciones señaladas en el Ordinal IV) del Artículo 42, serán suspendidos hasta que no se ajusten a las disposiciones de la Ley General sobre los Medios de Comunicación colectiva y este reglamento.

Arto. 46.—La reincidencia de las infracciones de los Ordinales II, III y IV del Artículo 42, podrá conllevar la suspensión temporal o definitiva y revocación de la concesión o permiso de los medios de comunicación colectiva a juicio del Consejo Especial Permanente, para lo cual se seguirá el procedimiento establecido en el Artículo 11 de "L.G.M.C.".

Arto. 47.—El presente reglamento entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva sin perjuicio de su publicación posterior.

Dado en la ciudad de Managua, a los 22 días del mes de Septiembre de mil novecientos setenta y nueve.—
"Año de la Liberación Nacional".

MINISTERIO DE CULTURA.— *Ernesto Cardenal,*
Ministro. ○

**LEY DE NACIONALIZACION Y CREACION
DEL INSTITUTO NICARAGUENSE DE
SEGUROS Y REASEGUROS**

Decreto No. 107

**LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA**

en uso de sus facultades,

Decreta:

La siguiente:

**LEY DE NACIONALIZACION Y
CREACION DEL INSTITUTO
NICARAGUENSE DE
SEGUROS Y REASEGUROS**

Nacionalización del Sistema de Seguros

Arto. 1o.—Quedan nacionalizadas las empresas de seguros nacionales. La transferencia de las Acciones de las Sociedades de Seguros del patrimonio de los actuales Accionistas al dominio del Estado, se operará por Ministerio de la Ley a la publicación del presente Decreto.

Precio de Adquisición de Acciones

Arto. 2o.—El precio de adquisición de las Acciones a que se refiere el Artículo anterior, será el valor en Libros según auditoría que se practicará al efecto, aplicando normas de contabilidad generalmente aceptadas y las regulaciones que dicte la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones.

Pago en Bonos del Estado

Arto. 3o.—El precio de las acciones será pagado con bonos del Estado que devengarán un interés de 6 1/2 % anual, pagadero por anualidad vencida computada desde la fecha de publicación del presente Decreto, y tendrán un plazo de cinco años de vencimiento. Sus tenedores podrán usarlos para la cancelación de obligaciones financieras o fiscales con el Estado. El Estado podrá cancelar los bonos mediante su pago en efectivo en cualquier momento antes del vencimiento.

Empresas Aseguradoras Extranjeras

Arto. 4o.—Los Contratos de Seguros emitidos por empresas aseguradoras extranjeras o sus sucursales, continuarán obligando a los Contratantes hasta la expiración del plazo del seguro o su vencimiento, prohibiéndose cualquier venta de nuevos seguros, y quedarán sujetos al régimen que les señale la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones. Mientras existan seguros vigentes, las sociedades de seguros extranjeras o sus sucursales deberán mantener las garantías, reservas y disposiciones de la "Ley General de Instituciones de Seguros".

Se reserva la Actividad Aseguradora al Estado

Arto. 5o.—La celebración activa de los Contratos de Seguros como Aseguradora y la contratación de Reaseguros como cedente, cesionario, retrocedente o retrocesionario queda reservada exclusivamente al Estado, así como la intermediación en la celebración de tales Contratos. La actividad de los Agentes y Agencias de Seguros será objeto de reglamentación.

Sanciones por Violación al Arto. 5o.

Arto. 6o.—Toda persona natural que individualmente o como Miembro de una Junta Directiva y Gerente del establecimiento o sociedad que violare el Artículo anterior, será sancionado de conformidad con las Leyes Penales.

Prohibición de Contratar con Empresas Extranjeras

Arto. 7o.—Se prohíbe en materia de seguros a cualquier persona natural o jurídica contratar con empresas extranjeras:

1. Seguros de personas cuando el asegurado se encuentre en la República al celebrarse el Contrato.
2. Seguros sobre bienes que se transporten de territorio nicaragüense a territorio extranjero o viceversa, cuando los riesgos queden a cargo de personas domiciliadas en el país. Las instituciones de crédito no otorgarán créditos cuando se hubiere pactado el seguro en contravención a lo dispuesto en este inciso.
3. Seguros de cascos de naves o de aeronaves y de cualquier clase de vehículos, contra riesgos propios del ramo marítimo y de transportes, siempre que dichas naves, aeronaves o vehículos sean de matrícula nicaragüense o propiedad de personas domiciliadas en la República o que

realizaren operaciones en el país en forma permanente.

4. Seguros de créditos cuando el asegurado esté sujeto a la legislación nicaragüense.
5. Seguros contra la responsabilidad civil derivada de eventos que puedan ocurrir en territorio nicaragüense.
6. Seguros de los demás ramos de daños, contra riesgos que puedan ocurrir en territorio nicaragüense.

Sanciones por Violación al Arto. 7o.

Arto. 8o.—Toda persona natural que individualmente o como miembro de la Junta Directiva y Gerente del establecimiento o socios de entidad colectiva, que violaren o intentaren violar el artículo anterior, serán castigados cada uno con multa de Diez a Cincuenta Mil Córdobas, que se impondrá administrativamente a favor del Fisco por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones, procediendo además a la clausura del establecimiento en su caso, sin perjuicio de la nulidad del Contrato.

Creación del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros

Arto. 9o.—Se crea EL INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGUROS Y REASEGUROS, Ente Autónomo que se denominará en la presente Ley "EL INSTITUTO", con personalidad jurídica, patrimonio propio con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, a quien corresponderá en el país, la contratación y administración de los seguros y reaseguros.

Duración y Domicilio

Arto. 10.—EL INSTITUTO será de duración indefinida, con domicilio en la ciudad de Managua, pudiendo establecer oficinas y sucursales dentro o fuera de la República.

El Instituto Sucesor de las Empresas Nacionalizadas

Arto. 11.—EL INSTITUTO será sucesor, sin solución de continuidad, de todos los bienes muebles e inmuebles, derechos adquiridos y obligaciones contraídas por las empresas de seguros nacionalizadas por la presente Ley.

Capital Inicial

Arto. 12.—El Capital Inicial de EL INSTITUTO, estará integrado por el total del patrimonio de las empresas de seguros nacionalizadas por esta Ley.

Garantía de sus Operaciones

Arto. 13.—Las operaciones de EL INSTITUTO estarán garantizadas con su Capital Inicial, patrimonio y reservas y además con la garantía y responsabilidad plena del Estado.

Consejo Directivo

Arto. 14.—La administración del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros, corresponderá a un Consejo Directivo nombrado por el Poder Ejecutivo y estará formado por: Un Presidente, un Vice-Presidente y un número de Directores no menor de cinco ni mayor de siete.

Determinación del Capital Inicial

Arto. 15.—El Consejo Directivo del Instituto, procederá a efectuar inventario, avalúo de los Activos y a deslindar los Pasivos, a fin de que una vez ajustados contablemente se determine por la Contraloría General de la República, la suma a que asciende el Capital Inicial.

Atribuciones y Deberes del Consejo Directivo

Arto. 16.—Atribuciones y deberes del Consejo Directivo:

1. Nombrar al Director General, Sub-Directores, Auditor y Sub-Auditor.
2. Acordar la política y operaciones del Instituto.
3. Revisar y autorizar el presupuesto de sueldos y gastos de cada ejercicio anual, así como presupuestos extraordinarios.
4. Examinar y aprobar mensualmente los Estados Financieros del Instituto.
5. Dictar los reglamentos internos y demás normas de operación del Instituto.
6. Ejercer cualquier otra facultad que le corresponda de acuerdo con las leyes o que no estuviere atribuida especialmente a otro organismo del Instituto.
7. Podrá en cualquier momento, inspeccionar conjunta o por alguno de sus miembros, las divisiones, departamentos y secciones de la Institución.
8. Aprobar la memoria anual del Instituto.
9. Sugerir al Ejecutivo los proyectos de Ley o reformas de las mismas que en materia de seguros estime conveniente.

Director General

Arto. 17.—El Consejo Directivo nombrará un Director General a cuyo cuidado estará la administración de los negocios del Instituto de acuerdo a la Ley a las instrucciones que reciba del Consejo Directivo. Se encargará de la ejecución de los acuerdos firmes del Consejo y será el encargado de nombrar y remover el personal del Instituto.

Representación Legal

Arto. 18.—El Director General tendrá la representación legal del Instituto y Poder General de Administración. Necesitará la autorización del Consejo Directivo para:

1. Celebrar Contratos de Compra-Venta de inmuebles, así como la constitución de gravámenes.
2. Transigir, comprometer en árbitros y arbitradores, cualquiera que sea el importe de la suma del respectivo negocio.
3. Desistir o aceptar desistimientos en cualquier instancia y en casación.
4. Efectuar cualquier nuevo Contrato de Reaseguro o cambios fundamentales en las condiciones de los vigentes, salvo los reaseguros facultativos.

El Consejo Directivo señalará al Director General mediante la estipulación de un conjunto de facultades generales, las normas de su actuación en todo lo relativo a Contratos de Reaseguros, compra-venta de valores, inversiones y demás operaciones que considere necesarias para el buen funcionamiento del Instituto.

Requisitos para ser Miembros del Consejo Directivo o Director General

Arto. 19o.—Requisitos para ser miembro del Consejo Directivo o Director General:

1. Ser nicaragüense y residir en el país.
2. Ser mayor de 25 años de edad.
3. Tener amplios conocimientos o experiencias en materia de seguros.
4. Ser persona de reconocida corrección, honradez y solvencia moral.

Impedimentos para ser Miembro del Consejo Directivo o Director General

1. Los parientes del Jefe o Jefes del Ejecutivo dentro del 4to. grado de consanguinidad ó 2do. de afinidad, ni los cónyuges a los que tuvieren igual grado de parentesco o sean cónyuges con los miembros del Consejo Directivo.
2. Ser miembro o funcionario de los Poderes del Estado.
3. Los Directores o Gerentes de Instituciones de Bancas y Finanzas o de cualquier otra entidad sujeta a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones.
4. Las personas que hubiesen sido condenadas por delitos comunes.

Los miembros del Consejo Directivo que en cualquier tiempo llegaren a tener los impedimentos mencionados, automáticamente cesarán en su cargo.

Atribuciones y deberes del Director General

Arto. 21.—El Director General tendrá a su cargo la administración del Instituto, de acuerdo con la Ley y las instrucciones del Consejo Directivo, correspondiéndole además las siguientes funciones:

1. Estudiar y presentar los asuntos que deba conocer el Consejo Directivo.
2. Otorgar los poderes Especiales a los funcionarios que sean necesarios para la marcha de la institución y otorgar poderes generales judiciales con las facultades que estime necesarias.
3. Establecer los reglamentos y normas administrativas para la eficiente gestión del Instituto.
4. Presentar al Consejo Directivo el proyecto de presupuesto anual de sueldos y gastos y los presupuestos extraordinarios y vigilar su estricto cumplimiento.
5. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación los Estados Financieros mensuales, así como las estadísticas e informes que sean convenientes conocer para la correcta dirección superior del Instituto.
6. Nombrar y remover a los empleados y funcionarios cuyo nombramiento no corresponde al Con-

sejo Directivo.

7. Preparar el proyecto de memoria anual.

Responsabilidad del Consejo y del Director General

Arto. 22.—Sin perjuicio de las otras sanciones que corresponden a los miembros del Consejo Directivo y al Director General conforme la Ley, responderán personal y solidariamente con sus bienes de todas las pérdidas que irroguen por los actos o resoluciones tomados en contravención a las disposiciones legales, quedando exentos de esta responsabilidad únicamente quienes hubiesen hecho constar su voto disidente en el acta de la sesión en que se hubiese tratado el asunto o quienes no hubiesen estado presentes. Las responsabilidades adicionales a que se refiere este artículo prescribirán en cinco años después de haberse producido el hecho punible.

Sub-Directores

Arto. 23.—El Consejo Directivo nombrará los Sub-Directores que considere convenientes, reemplazarán al Director General en sus ausencias temporales y tendrán las facultades y funciones que el Consejo Directivo y el Director General le señalen. Los Sub-Directores deberán tener las mismas calidades que el Director General.

Vigilancia

Arto. 24.—El Instituto estará sometido a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones, quien deberá controlar que las gestiones se ajusten a las disposiciones de la Ley, así como a las normas y reglamentos que le rijan.

Fiscalización y Control

Arto. 25.—Las funciones de fiscalización interna estarán a cargo de un Auditor y un Sub-Auditor nombrados para tal efecto por el Consejo Directivo. El Auditor informará periódicamente al Consejo Directivo del resultado de sus labores. El Auditor y Sub-Auditor deberán reunir las calidades reglamentadas para ser Director General y además ser Contador Público Autorizado.

Normal funcionamiento

Arto. 26.—Todos los funcionarios y empleados de las instituciones aseguradoras, deberán permanecer en sus puestos y cumplir sus funciones con entera lealtad al Instituto y al Estado.

Publicación del Balance Anual

Arto. 27.—El Instituto publicará anualmente sus Estados Financieros.

Año Económico

Arto. 28.—El año económico del Instituto abrirá y terminará con el año civil.

Plazo para someter al Ejecutivo el Reglamento de la presente Ley

Arto. 29.—El Consejo Directivo presentará al Ejecutivo dentro de los seis meses siguientes de su nombramiento, el reglamento para su aprobación de acuerdo a la presente Ley y a la práctica del Seguro.

Aplicación Transitoria del Código de Comercio

Arto. 30.—Las relaciones entre los asegurados y El Instituto se regirán por las disposiciones pertinentes de la Ley General de Instituciones de Seguros y del Código de Comercio, mientras no se dicte la Ley de Seguros.

Derogación de otras Leyes

Arto. 31.—Quedan derogadas las leyes y disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Vigencia

Arto. 32.—La presente Ley entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en el Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los dieciséis días del mes de octubre de mil novecientos setenta y nueve. "Año de la Liberación Nacional".

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — Sergio Ramírez Mercado. — Moisés Hassan Morales. — Alfonso Robelo Callejas. — Daniel Ortega Saavedra.○

CREACION DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Y SU CONSEJO SUPERIOR

Decreto No. 136

**LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA**

Considerando:

1. Que todas las instituciones de finanzas, en general, es decir, los bancos, las financieras y las entidades de ahorro y préstamo, pertenecen al Estado.
2. Que es conveniente y necesario coordinar de manera adecuada los esfuerzos y actividades de estas instituciones.

Por Tanto:

Decreta:

Arto. 1o.—El Banco Nacional de Desarrollo, el Banco de Crédito Popular, los bancos y sociedades financieras y las instituciones del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, integrarán en lo sucesivo un solo sistema que se denominará "SISTEMA FINANCIERO NACIONAL".

Arto. 2o.—Cada una de las instituciones integrantes del Sistema Financiero Nacional, conservará su personalidad e individualidad jurídica propia, pero a partir de la fecha de vigencia de la presente ley se considerará que todas ellas tienen un solo organismo de dirección superior, común a todas, que se denominará "Consejo Superior del Sistema Financiero Nacional", en adelante llamado por brevedad solamente "el Consejo Superior".

Arto. 3o.—El Consejo Superior coordinará en representación del Gobierno de la República todas las actividades de las Instituciones integrantes del Sistema Financiero Nacional y podrá acordar la especialización de cada una de ellas en determinados campos de esa actividad, o bien disponer que puedan ejercer todas dichas actividades. Asimismo deberá proponer en su caso la reestructuración general del Sistema Financiero Nacional para la emisión de la Ley que fuera necesaria. Además, el Consejo Superior coordinará el Sistema Financiero Nacional con miras a asegurar una utilización óptima de los recursos disponibles, para adecuación hacia los planes de desarrollo del país, además tendrá las facultades y atribuciones siguientes:

- a) Por lo que hace a las instituciones que fueron objeto del Decreto de Nacionalización del 26 de julio de 1979, originalmente organizadas en forma de sociedades anónimas, tendrá todas las facultades y atribuciones que de acuerdo con sus pactos sociales, estatutos y conforme a la Ley en general corresponden a las Juntas Generales de Accionistas respectivas;
- b) Por lo que hace al Banco Nacional de Desarrollo y al Banco de Crédito Popular, tendrá las facultades y atribuciones que le confiera la Junta de

Gobierno de Reconstrucción Nacional, así como las facultades y atribuciones encomendadas al Banco Central de Nicaragua en Decreto No. 114 del 11 de octubre de 1979 y las facultades y atribuciones correspondientes a las Juntas Generales de Accionistas de las sociedades anónimas, en lo que sea aplicable a este tipo de instituciones.

Arto. 4o.—El Consejo Superior contará con una Secretaría Ejecutiva, la cual tendrá además, funciones de asesoría económica, legal y financiera de dicho Consejo.

Arto. 5o.—El Consejo Superior estará integrado de la siguiente manera:

- a) Un miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que lo presidirá;
- b) El Presidente del Banco Central de Nicaragua;
- c) El Ministro de Planificación Nacional;
- d) El Ministro del Instituto de Reforma Agraria;
- e) El Director Ejecutivo del Fondo Internacional para la Reconstrucción de Nicaragua;
- f) El Ministro de Comercio Exterior e Interior;
- g) El Coordinador General del Fideicomiso de Reconstrucción Nacional;
- h) Un representante de las Instituciones integrantes del Sistema Financiero Nacional;
- i) Un representante del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP);
- j) Dos representantes de las organizaciones laborales.

Arto. 6o.—El Presidente del Consejo invitará a las reuniones a otros Ministros, Presidentes o Directores de organismos autónomos y entes descentralizados cuando se traten materias de sus respectivas áreas de competencia.

Arto. 7o.—El Consejo Superior dictará su propio reglamento interno y los reglamentos que sean necesarios para el funcionamiento de las Instituciones integrantes del Sistema Financiero Nacional.

Arto. 8o.—El presente Decreto deroga cualquier disposición legal que se le oponga.

Arto. 9o.—El presente Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos setenta y

nueve.— "Año de la Liberación Nacional".

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — *Violeta Barrios de Chamorro*. — *Sergio Ramírez Mercado*. — *Alfonso Robelo Callejas*. — *Moisés Hassan Morales*. — *Daniel Ortega Saavedra*. ○

LEY DE NACIONALIZACION DEL SECTOR MINERO Y CREACION DE CONDEMINA

Decreto No. 137

LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA

Considerando:

I

Que uno de los principios fundamentales de la Soberanía Nacional en todo lo referente al aprovechamiento de los recursos naturales y de manera especial sobre los de naturaleza mineral.

II

Que hasta la fecha los recursos minerales del país han sido explotados esencialmente por compañías privadas de capital foráneo, cuyos beneficios han sido ajenos a los intereses populares.

III

Que la actividad minera en el país ha constituido una de las lacras socio-políticas más elocuentes de nuestra situación de dependencia y acarreado perjuicios de índole sanitaria, social, política, económica y ecológica del país, destacándose el deterioro humano de los obreros de las minas.

IV

Que hasta el momento el control estatal sobre las prospección, explotación y comercialización de los minerales ha sido prácticamente nulo y la recaudación estatal por conceptos tributarios desmesuradamente menor al beneficio derivado de la actividad aludida.

V

Que con base en los decretos de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y de manera especial en el del 24 de agosto de 1979 y en el Decreto No. 112 del 25 de octubre del mismo año, los recur-

los naturales constituyen un patrimonio exclusivo del Estado, y por tanto su manejo integral y explotación racional son potestad del mismo.

Por Tanto:

en uso de sus facultades,

Decreta:

La siguiente:

"LEY DE NACIONALIZACION DEL SECTOR MINERO"

Cancelación de Concesiones

Arto. 1o.— Quedan canceladas y en consecuencia, sin ningún efecto ni valor legal todas las concesiones de exploración y explotación de minerales otorgadas hasta la presente fecha,

Nacionalización de Empresas Mineras

Arto. 2o.— Quedan nacionalizadas las empresas mineras que operan en el país mediante la adquisición por el Estado de la totalidad de las acciones, cuotas, participaciones o interés social de cada una de ellas, lo mismo que las empresas mineras de propiedad individual. La transferencia del patrimonio al dominio del Estado se operará por Ministerio de la Ley con la publicación del presente Decreto.

Precio de Adquisición

Arto. 3o.— El precio de adquisición de las acciones o demás títulos que represente los derechos de las empresas afectadas, a que se refiere el Artículo anterior será el valor en libros según Auditoría que se practicará para tal efecto, aplicando principios de Contabilidad generalmente aceptadas.

Forma de Pago

Arto. 4o.— El precio de las acciones será pagado en Bonos del Estado que devengarán un interés del 6 1/2 % anual, pagaderos por anualidad vencida, computado desde la fecha de publicación del presente decreto y tendrán un plazo de cinco años de vencimiento.

Los tenedores de Bonos podrán usarlos para la cancelación de obligaciones financieras o fiscales con el Estado. El Estado podrá cancelar los Bonos mediante su pago en efectivo en cualquier momento antes de su vencimiento.

Indemnización Histórica

Arto. 5o.— El Estado se reserva el derecho de exigir una indemnización económica por el daño humano, el deterioro ecológico de su territorio y por las evasiones fiscales causadas por las personas naturales o jurídicas que resultaren afectadas por el presente Decreto.

Creación de "Condemina"

Arto. 6o.— Para los propósitos del futuro aprovechamiento minero del país, créase la Corporación Nicaragüense de Desarrollo Minero que también podrá llamarse "CONDEMINA", Institución semi-autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será coordinada y asesorada por el Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA), con fundamento en lo establecido en el artículo 3o. del Decreto No. 112 del 25 de octubre de 1979.

Del Capital

Arto. 7o.— El capital Inicial de CONDEMINA estará integrado por el patrimonio de la totalidad de las empresas mineras nacionalizadas a través de esta

Ley.

De la Administración

Arto. 8o.— La administración de CONDEMINA corresponderá a un Consejo Directivo presidido por un miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional e integrado por dos representantes del Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente (IRENA) un representante del Ministerio de Industria y Comercio, un representante del Ministerio de Comercio Exterior, un representante del Banco Central de Nicaragua y un representante de los trabajadores del Sector Minero.

Sin perjuicio de la representación oficial que con calidad de mandatario generalísimo corresponda al Presidente del Consejo Directivo, el Presidente podrá delegar dicha representación total y parcialmente en otras personas.

Continuidad Operativa

Arto. 9o.— El Estado garantiza a través de la Corporación Nicaragüense de Desarrollo Minero (CONDEMINA) en el efectivo desarrollo de sus fines, la continuidad de las operaciones mineras en el país.

Inscripción de Bienes

Arto. 10o.— Facúltase a CONDEMINA para presentar ante los Registros competentes solicitud de inscripción a su favor de todos los bienes y derechos de cualesquiera clase que pertenecían a las empresas nacionalizadas por este Decreto, procediendo los Registradores a realizar tales inscripciones con la sola presentación de "La Gaceta", Diario Oficial, donde aparezca publicado este Decreto, eximiéndose a CONDEMINA del pago de honorarios e impuestos que ocasionaren tales trasposos.

Futura Ley Orgánica

Arto. 11o.— La Corporación Nicaragüense de Desarrollo Minero (CONDEMINA) tendrá su propia Ley Orgánica, que regulará el ordenamiento jurídico de todo el sector minero del país, complementando este Decreto.

Derogación

Arto. 12o.— La presente Ley es de orden público y deroga cualquier disposición anterior que se le oponga.

Vigencia

Arto. 13o.— El presente Decreto entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación colectiva, sin perjuicio de su publicación posterior en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en el Mineral de La Luz, Siuna, Departamento de Zelaya a los dos días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.— "Año de la Liberación Nacional".

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL.— Violeta B. de Chamorro. — Sergio Ramírez Mercado. — Alfonso Robelo Callejas. — Moisés Hassan Morales. — Daniel Ortega Saavedra. ○

**CREACION SISTEMA ESTATAL
DE RADIODIFUSION DE NICARAGUA**

Decreto No. 169

**LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL**

**DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA**

en uso de sus facultades,

Decreta:

Arto. 1o.—Créase Sistema Estatal de Radiodifusión de Nicaragua.

Arto. 2o.—El Sistema Estatal de Radiodifusión de Nicaragua estará encabezado por "La Voz de Nicaragua", sucesora de la antigua "Radiodifusora Nacional". Además de la emisora estará integrado por una cadena de plantas repetidoras distribuidas por todo el país, así como por las emisoras locales o departamentales que le sean adscritas.

Arto. 3o.—El Sistema Estatal de Radiodifusión de Nicaragua estará adscrito a la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, para todos los efectos de su funcionamiento, orientación, administración y programación, siendo su órgano oficial en materia de radiodifusión, tanto en el campo nacional como en el internacional, para lo que se servirá también de la onda corta en forma exclusiva, con las frecuencias que actualmente posee, o las que las necesidades específicas determinen.

Arto. 4o.—El presente Decreto entrará en vigencia hoy, desde el momento de su publicación por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de su publicación posterior en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos setenta y nueve. — "Año de la Liberación Nacional".

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — Violeta B. de Chamorro. — Sergio Ramírez Mercado. — Moisés Hassan M. — Alfonso Robelo Callejas. — Daniel Ortega Saavedra. ○

**CREACION DEL FONDO PARA
COMBATIR EL DESEMPLEO**

Decreto No. 179

**LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA**

Considerando:

Que el problema del desempleo tiene causas que se originan en la estructura de la economía Nicaragüense, profundizadas por el manejo de los gobiernos dictatoriales y que es prioridad del Gobierno de Reconstrucción Nacional, crear los mecanismos encaminados a su eliminación.

Por Tanto:

en uso de sus facultades,

Decreta:

Arto. 1o.—Se crea el FONDO PARA COMBATIR EL DESEMPLEO, destinado a promover nuevas fuentes de trabajo.

Arto. 2o.—El FONDO será administrado por un Consejo Presidido por un Miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, integrado por: un Delegado del Ministerio de Finanzas, un Delegado del Ministerio de Bienestar Social, un Delegado del Ministerio del Trabajo y dos representantes de las organizaciones laborales.

Arto. 3o.—El FONDO PARA COMBATIR EL DESEMPLEO estará constituido por:

- a) Las cantidades del treceavo mes o aguinaldo navideño, con que contribuirán todos los asalariados del país, de conformidad con lo que se dispone a continuación:

Todos los asalariados que tengan un sueldo hasta por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS CORDOBAS (C\$1,500.00); recibirán la suma correspondiente a su treceavo mes de acuerdo al tiempo que han laborado; y estarán exentos de contribuir al FONDO, aquellos asalariados cuyo sueldo exceda de UN MIL QUINIENTOS CORDOBAS (C\$1,500.00); recibirán por concepto del treceavo mes la parte proporcional de conformidad con el tiempo trabajado, hasta un máximo de UN MIL QUINIENTOS CORDOBAS (C\$1,500.00); quedando el remanente como aporte al FONDO;

- b). Cualquier aportación voluntaria o donación que se hiciere por cualquier persona o entidad nacional o extranjera para tal objeto.

Arto. 4o.—El Ministerio de Finanzas, queda facultado para deducir el porcentaje de la contribución de las nóminas correspondientes del gobierno central.

Arto. 5o.—Las empresas del área de propiedad del

pueblo, las empresas estatales, los organismos descentralizados y entes autónomos, las instituciones bancarias y de seguros nacionalizados, los organismos municipales y las empresas privadas, deberán operar como agentes de retención de las contribuciones de los asalariados; con obligación de enterarlas no más allá del 31 de diciembre del presente año al Ministerio de Finanzas, en la Tesorería General de la República, acompañando las nóminas respectivas que indicarán nombre, cargo, monto de la remuneración mensual, y el monto del treceavo mes correspondiente.

Arto. 6o.—En el recibo de cancelación a los asalariados, correspondientes al treceavo mes, se detallará la liquidación del monto bruto, la contribución al FONDO para combatir el desempleo y la cantidad neta efectiva que recibe el asalariado.

Arto. 7o.—Se deroga cualquier disposición que se oponga total o parcialmente a la presente Ley.

Arto. 8o.—El presente Decreto entrará en vigencia desde su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y nueve. — *"Año de la Liberación Nacional"*.

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — *Violeta B. de Chamorro*. — *Sergio Ramírez Mercado*. — *Alfonso Robelo Callejas*. — *Moisés Hassan Morales*. — *Daniel Ortega Saavedra*.

LEY CREADORA DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES

No. 185

LA JUNTA DE GOBIERNO DE
RECONSTRUCCION NACIONAL
DE LA
REPUBLICA DE NICARAGUA

Considerando:

I

Que el Triunfo de la Insurrección Popular Sandinista, produjo la liquidación total del régimen genocida y tiránico de la dinastía somocista con todos sus engranajes militares, estatales y políticos, finalizando con eso la impunidad de una serie de graves delitos de

diversa naturaleza en los cuales están involucrados funcionarios, empleados, militares y paramilitares, colaboradores y agentes que se mantuvieron al servicio de esa tiranía.

II

Que este hecho extraordinario ha creado al Gobierno Revolucionario, una verdadera situación de emergencia que implica la inversión considerable de recursos humanos y materiales para la atención de tal situación, por lo que es exigible una pronta solución del problema en beneficio de los mejores intereses populares.

III

Que por dichas razones, se hace necesaria la Organización inmediata de los Tribunales Especiales de Primera Instancia y de Apelación y la creación de un procedimiento rápido, donde sin menoscabo alguno de las garantías esenciales de los encausados y asegurando al mismo tiempo los intereses fundamentales del pueblo nicaragüense, se garantice la celeridad que el caso amerita.

Por Tanto:

en uso de sus facultades,

Decreta:

La siguiente:

LEY CREADORA DE LOS TRIBUNALES ESPECIALES

Capítulo I

De la Organización

Artículo 1o.—Se establecen los Tribunales Especiales de Primera Instancia y de Apelación, con el objeto de conocer los delitos tipificados en el Código Penal Vigente, cometidos por militares, funcionarios y empleados civiles del régimen anterior, y cualquier otra persona que amparada por sus relaciones con ellos, hubiera participado en la comisión de los mismos, ya sea como autores, cómplices o encubridores, y que se encuentren detenidas o fueran habidas durante la vigencia de estos Tribunales.

No se encuentran comprendidos en esta Ley, los menores a que se refiere la Ley Tutelar de Menores, ni aquellas personas que fueren habidas por vía de extradición.

Artículo 2o.—Los Tribunales Especiales, tendrán jurisdicción y competencia en todo el territorio nacional.

Artículo 3o.—Se establecen Nueve Tribunales de Primera Instancia, del 1o. al 9o. y tres Tribunales de Apelación, del 1o. al 3o., los cuales tendrán su asiento en la ciudad de Managua, pero podrán sesionar y tramitar

total o parcialmente los procesos, en cualquier parte del territorio nacional, donde las circunstancias así lo requieran. El número de estos Tribunales podrá variarse en la medida que resulte necesario.

Artículo 4o.—Tendrán como Superior Jerárquico para conocer de la Segunda Instancia de los Tribunales Primero, Segundo y Tercero, el Tribunal Primero de Apelación; de los Tribunales Cuarto, Quinto y Sexto, el Tribunal Segundo de Apelación; y de los Tribunales Séptimo, Octavo y Noveno, el Tribunal Tercero de Apelación.

Habrà un Coordinador General de los Tribunales Especiales nombrado por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, encargado de la Coordinación y funcionamiento administrativo de los mismos, quien responderá de sus actuaciones ante la misma Junta de Gobierno.

Artículo 5o.—Los Tribunales Especiales de Primera Instancia y de Apelación estarán integrados por tres miembros propietarios, uno de los cuales será Presidente, con sus respectivos suplentes.

Artículo 6o.—Los miembros de los Tribunales Especiales y sus respectivos suplentes, tanto en los Tribunales Especiales de Primera Instancia como de Apelación, serán nombrados por la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Artículo 7o.—Los Tribunales Especiales nombrarán un Secretario de Actuaciones y el personal auxiliar necesario, para el correcto desempeño de sus funciones.

Capítulo II

De los Miembros

Artículo 8o.—Para ser Presidente de los Tribunales Especiales de Primera Instancia y de Apelación o suplentes de aquél, se requiere:

- a) Ser Abogado o estudiante de Derecho de uno de los dos últimos años;
 - b) Ser persona de reconocida solvencia moral;
 - c) Ser mayor de 21 años;
- Iguales requisitos, para los Miembros Propietarios y sus suplentes de los Tribunales de Apelación.

Artículo 9o.—En el caso de los demás miembros de estos Tribunales, así como de sus secretarios, sólo serán exigibles los requisitos de las letras b) y c) del artículo anterior y además poseer la capacidad suficiente para el desempeño del cargo.

Artículo 10o.—Para el personal auxiliar se exigirá ser persona de reconocida solvencia moral, y tener la aptitud necesaria para desempeñar sus respectivos cargos.

Capítulo III

Del Procedimiento

Artículo 11o.—Para los casos de las personas detenidas después de la promulgación de esta Ley, por los hechos a que ella se refiere, el procedimiento será:

a) La oficina o autoridad militar responsable de la investigación de dichas personas actuará así:

1. Pondrá a estas personas en conocimiento de la Fiscalía Especial de Justicia dentro de las veinticuatro horas siguientes a haberse efectuado, con expresión de los cargos a investigar.
2. De no haberse concluido las investigaciones dispondrá de un término de hasta veinte días para completarla. Este término podrá extenderse hasta en diez días más por la Fiscalía Especial de Justicia. Excepcionalmente, este término podrá extenderse hasta un máximo improrrogable de tres meses a solicitud de las autoridades investigadoras y autorizado por la Fiscalía Especial de Justicia.
3. Cuando la detención se realice por cualquier otra autoridad militar o de policía, pedirá a éstas que remitan de inmediato el asunto, para que se proceda en la forma reglamentada.
4. Concluida la investigación remitirán los resultados a la Fiscalía Especial de Justicia.

b) La Fiscalía Especial de Justicia, con los resultados de la investigación podrá poner en libertad al detenido y archivar las diligencias o formular acusación ante los Tribunales Especiales que por esta Ley se crean;

c) De producirse acusación por la Fiscalía Especial de Justicia, el Tribunal Especial correspondiente decretará la detención provisional del acusado;

d) Presentada la acusación y proveído el auto de iniciación del Proceso, dentro de tres días se recibirá al procesado declaración indagatoria con cargos, leyéndole la acusación formulada en su contra. Recibida la declaración se le advertirá del derecho que le asiste de nombrar defensor, el que no tendrá necesariamente que ser abogado;

e) Si el procesado manifestare que no quiere ser defendido, se pondrá constancia de esta circuns-

tancia en el expediente, y el Tribunal le nombrará uno de oficio;

f) Si el procesado designare defensor o se le nombrare de oficio, se hará saber a éste la designación de que ha sido objeto y a partir de ese momento, será tenido como tal y se le dará en el proceso la debida intervención. El defensor contará a partir de la notificación de su designación, con veinticuatro horas para estudiar el expediente y preparar la defensa;

g) A continuación se abrirá de inmediato a prueba el juicio, por el término de hasta ocho días, durante el cual, tanto la acusación, como la defensa, podrán presentar las pruebas o alegatos que estimaren convenientes, las que deberán proponerse y recibirse por escrito con citación de la parte contraria. Serán admisibles toda clase de pruebas, aún las no previstas por la Legislación Procesal Común Vigente;

h) Únicamente a juicio del Tribunal, el término probatorio podrá prorrogarse por un plazo de hasta cuatro días, con el objeto de recibir pruebas que por el Tribunal se consideren indispensables para la adecuada resolución del caso;

i) Concluido el término probatorio y no habiendo nulidades, las pruebas serán analizadas por el Tribunal, apreciando según su conciencia las pruebas aportadas en el juicio, las razones expuestas por la acusación y por la defensa y lo manifestado por los mismos procesados, el que en sesión secreta y por mayoría de votos emitirá, sin otro trámite, resolución de conciencia, acerca de la calificación del delito y de la inocencia o culpabilidad del procesado. Si la resolución es de inocencia, se ordenará de inmediato su libertad;

j) Si la resolución es de culpabilidad, en los tres días siguientes, el Tribunal, de conformidad con dicha resolución dictará la sentencia correspondiente, aplicando la pena, según el grado de participación delictiva del procesado y las circunstancias agravantes y atenuantes, de conformidad con el Código Penal Vigente, estableciendo asimismo la fecha en que queda cumplida la condena.

Artículo 12o.—En los casos de las personas que esta Ley comprende, detenidas antes de la vigencia de la misma, las autoridades militares correspondientes que hayan actuado en los respectivos casos, estarán obligadas a dar cuenta a la Fiscalía Especial de Justicia, con informe expreso de los cargos que existan contra cada detenido

y los elementos de prueba que consten en los respectivos expedientes, y además a iniciar o concluir la investigación de los reos a que se refiere este artículo, en los casos en que fuere posible, por el orden cronológico en que fueron detenidos.

Dichas personas entrarán en el procedimiento establecido en la presente Ley, sin aplicación de los términos señalados en los acápites 1) y 2) inciso a) del artículo anterior.

Artículo 13o.—Los Abogados y Pasantes de Derecho están obligados a desempeñar el cargo de Defender de Oficio, entendiéndose este servicio como una función social del ciudadano, salvo en los casos de fuerza mayor e impedimento legítimo calificado por el Tribunal.

Los que se excusaren sin causa legítima sufrirán una multa de Un Mil Córdobas (C\$1,000.00) a Tres Mil Córdobas (C\$3,000.00) que impondrá el Tribunal en beneficio del Fisco y además, inhabilitación especial por el término de seis meses cuando fueren abogados, sanción que aplicará la Corte Suprema de Justicia, previo informe del Tribunal correspondiente.

Artículo 14o.—Los Tribunales de Primera Instancia, podrán girar exhortos a los Jueces Comunes, para diligenciar cualquier Providencia y éstos estarán obligados a evacuarlos y devolverlos dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recibo.

Artículo 15o.—Los autos de mero trámite o cualquier diligencia, serán válidos con la firma de cualquier miembro del Tribunal y autorizados por el Secretario.

Toda diligencia o trámite que deban ponerse en conocimiento de las partes, se hará saber a las mismas por medio de notificación que se hará ante una oficina de información radicada en la sede del Tribunal, donde deberán concurrir las partes para conocimiento de lo notificado. La notificación será válida por la simple entrega realizada al responsable en dicha oficina, lo cual el Secretario hará constar en el proceso.

Artículo 16o.—La Fiscalía Especial de Justicia, podrá solicitar a los Jueces Comunes los juicios que se hubieren iniciado, para conocer de los hechos señalados en el Artículo 1o. de esta Ley, en el trámite en que se encuentren, debiendo en ese caso, ser remitidos para su conocimiento al Tribunal que se indique, dentro de un plazo de tres días.

Artículo 17o.—Los reos sujetos a este procedimiento no podrán ser excarcelados bajo ningún tipo de fianza.

Artículo 18o.—Las sentencias condenatorias dictadas por estos Tribunales, admitirán el recurso de Apelación, el que deberá presentarse dentro de los tres días siguientes de su notificación, ante el Tribunal de Primera Instancia, por escrito y expresando agravios.

Artículo 19o.—El apelado tendrá en tal carácter, un término igual al anterior para contestar agravios, en escrito presentado ante el propio Tribunal de Primera Instancia, el que pasará de inmediato los autos y escritos presentados al Tribunal de Apelación que corresponda.

El Tribunal de Apelación, recibidas las actuaciones y estudiado el recurso, dictará sentencia dentro del término de tres días, y contra la misma no habrá recurso de Casación o de cualquier otra clase.

Artículo 20o.—El tribunal de Apelación, al examinar la sentencia recurrida, no podrá pronunciarse sobre la resolución de inocencia o culpabilidad del procesado, debiendo únicamente resolver en conciencia acerca de la calificación del delito, sobre la pena y demás circunstancias resueltas en la sentencia.

Si la sentencia recurrida resultare modificada por el Tribunal de Apelación, esta última causará ejecutoria, devolviéndose los autos al Tribunal de Primera Instancia, para la ejecución de la sentencia firme. De ser ratificada la sentencia recurrida, esta adquiere firmeza de pleno derecho y causará ejecutoria.

La sentencia dictada por un Tribunal de Primera Instancia que transcurrido el término establecido en el Artículo 18o. de esta Ley, no sea recurrida, quedará firme y ejecutoriada.

Arto. 21o.—Cualquier violación de las normas procesales escritas en la presente, puede ser objeto de nulidad e interponerse ante el Tribunal de Primera Instancia, por cualquiera de las partes y siempre que la violación pueda afectar el resultado final del proceso. Este alegato de nulidad deberá interponerse antes de celebrarse la sesión secreta del Tribunal de Primera Instancia, debiendo éste resolver sobre el mismo en un término no mayor de las veinticuatro horas siguientes a su interposición. Admitida la nulidad, el Tribunal declarará nulo el acto o trámite viciado, quedando con toda validez las demás diligencias y trámites que no estén afectados por la nulidad, siempre y cuando la nulidad no sea la falta de declaración indagatoria con cargos cuando haya reo presente, o la falta de nombramiento de defensor cuando no esté ejerciendo él mismo ese derecho.

Artículo 22o.—Los Presidentes y demás miembros

de los Tribunales que por esta Ley se crean, que se encuentran comprendidos dentro de alguna de las causas de recusación o implicancia que se establecen en la Legislación Común Vigente, estarán obligados a excusarse de su participación en el proceso en el que específicamente concurra tal causal, inmediatamente que tengan conocimiento de esas causales.

Artículo 23o.—Salvo el recurso de Apelación y el alegato de nulidad a que se refieren respectivamente los Artículos 18o. y 21o. de esta Ley, no será admisible ninguna otra clase de recurso o incidente.

Artículo 24o.—Los Tribunales que por esta Ley se crean, podrán disminuir los términos que en la misma se fijan previa advertencia y aceptación de las partes, en la medida en que resulte conveniente para abreviar el desarrollo del proceso, sin afectar en ningún caso su adecuada resolución.

Artículo 25o.—Cualquier cuestión que se suscite

durante el desarrollo del proceso, no prevista por esta Ley, será resuelta por el mismo Tribunal.

Artículo 26o.—Estos Tribunales subsistirán hasta que juzguen a las personas que se señalan en el Artículo 1o. de esta Ley.

Artículo 27.—El presente Decreto entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.

Dado en la ciudad de Managua, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos setenta y nueve. — *"Año de la Liberación Nacional"*.

JUNTA DE GOBIERNO DE RECONSTRUCCION NACIONAL. — *Sergio Ramírez Mercado.* — *Alfonso Robelo Callejas.* — *Moisés Hassan Morales.* — *Daniel Ortega Saavedra.* — *Violeta B. de Chamorro.* ○